



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 34

JULIO 2009

Honduras: lecciones para Nicaragua

Los recientes acontecimientos en Honduras han generado una ola de reacciones, ya sea a favor o en contra. La comunidad internacional se ha pronunciado claramente al respecto y los países latinoamericanos realizaron rápidas acciones frente a la situación. Más allá de si la expulsión del presidente Zelaya de Honduras fue o no un golpe de estado, lo cierto es que este hecho puso nuevamente sobre el tapete varios temas importantes: la fragilidad de las democracias, el papel de los ejércitos, y la eficacia de la OEA.

Para la región centroamericana y para Nicaragua, el acontecimiento no puede pasar desapercibido y deja muchas lecciones, sobre todo considerando la similitud de los problemas que enfrenta el país. El debate nunca fue más pertinente. 30 años después de la revolución que marcó un hito en la historia de la región, los problemas son los mismos.

Por ello, es necesario mirar la realidad de frente antes de volver a repetir viejas historias en las que los golpes de estado, el protagonismo de los militares y la vocación autoritaria de los grupos de poder pasaron por encima de las voluntades y los derechos ciudadanos.

Es indudable la defensa del principio de legalidad democrática frente a un golpe de estado, pero esta posición tiene detrás lecturas con pocos consensos y procedimientos débiles si se la examina a la luz de los procesos políticos que vive la región centroamericana. La crisis política hondureña, que se avizora, de larga duración y de suma complejidad, deja lecciones urgentes para todos los países centroamericanos, pero particularmente para Nicaragua, considerando la evolución del proceso po-

La actualidad de viejos problemas

Los peligros que acechan a la democracia y la gobernabilidad, ahora más que nunca son motivo de preocupación. La crisis que vive Honduras pone a prueba las prácticas y las ideas recientes sobre ambos temas y nos interrogan duramente, sin simplificaciones cómodas.

Estos acontecimientos establecen un parte aguas a las ideas que han prevalecido durante los últimos 20 años respecto al desarrollo democrático y su defensa.



lítico del país durante los últimos tres años.

Las coordenadas de la crisis hondureña

Desde hace muchos meses en Honduras se reconocía la extrema debilidad política del gobierno de Manuel Zelaya y se especulaba con la posibilidad de que no terminara su mandato si se agudizaba la crisis entre los diferentes poderes del Estado.

La realidad es que ese gobierno fue débil desde sus inicios, tanto por la base electoral con que fue electo como por su incapacidad para generar alianzas y procesos negociadores consistentes que le dieran salida a los problemas políticos acumulados. La corrupción, la ineficacia de las políticas públicas, la lentitud de los procesos de reforma del estado y la descentralización, la elevada inseguridad pública y el populismo clientelista, entre otros, continuaron su curso.

La acción pública del ejecutivo se diluyó en prácticas clientelistas sin control y rendición de cuentas, dando lugar a que el fondo para la reducción de la pobreza desapareciera y se realizaran asignaciones e incrementos salariales inviables presupuestariamente. Muchos se alarmaron con este estilo de gobierno, incluso la cooperación que de hecho, suspendió el apoyo presupuestario para el periodo 2007-2008. La retórica presidencial "izquierdizante" que había invadido la acción gubernamental en los últimos dos años, se inflamó de manera proporcional a la debilidad del gobierno y el presidente pretendió encubirla con un apoyo internacional y la movilización social interna que distaban mucho de ser una realidad consistente.

La crisis se disparó cuando el mandatario intentó realizar una

consulta para instaurar una constituyente que reformara la carta magna del país y que en el fondo pretendía establecer la reelección presidencial, igual que en otros países del ALBA. Justificada con el discurso de ampliar la democracia, la consulta cayó en paracaídas durante un año electoral y contaminó todo el proceso político, de por sí caracterizado por una alta tensión entre los poderes del estado y la marcada debilidad del gobierno.



Manuel Zelaya

La decisión de imponer la consulta desde la presidencia, utilizando la logística militar, aún con el veto de los demás poderes del estado, precipitó el conflicto e hizo reaccionar a los demás poderes, incluidos el judicial y el legislativo, quienes no dudaron en deponer al presidente Zelaya mediante un golpe de estado ejecutado por el ejército.

Esta decisión sugiere muchas preguntas: ¿por qué Zelaya hizo de la consulta una batalla termi-

nal, yendo personalmente a recuperar las cajas con el material a una base aérea?, ¿por qué los grupos de poder dominantes en las instituciones y en los partidos Nacional y Liberal, optaron por el golpe y lo apoyaron en la lógica de un enfrentamiento decisivo?, ¿por qué no se buscaron caminos negociados a la crisis?

No hay blanco y negros

La oposición que destituyó a Zelaya ciertamente es de derecha, cosa que no ubica al depuesto presidente automáticamente en la izquierda. Las fuerzas políticas estaban conscientes de la debilidad de la presidencia. Esta oposición, ubicada en instituciones clave del país, intentó volver las cosas a su cauce durante varios meses, utilizando para ello presiones políticas, pero finalmente no quiso correr el riesgo de prolongar la crisis con una disputa en torno a la legitimidad y legalidad de dos poderes: el presidencial y el del congreso. La creciente polarización se agudizó de tal manera que alineó a los actores políticos alrededor de un desenlace inmediato y drástico, en vez de una salida negociada y democrática.

Así, el golpe de estado es la expresión de un conflicto más profundo entre diferentes grupos del desgastado sistema bipartidista vigente en el país.

El gobierno de Zelaya se nutrió de algunos sectores gremiales y viejos cuadros de la izquierda que creyeron posible avanzar en destruir la sociedad hondureña cubiertos con la bandera de un liberal que se transformaba. Sin embargo, la sociedad hondureña había realizado avances en los últimos 18 años alrededor de una nutrida agenda de cambios sobre la cual había un debate abierto y posicionamientos claros de diferentes actores sociales. Zelaya



pudo haber hecho mucho con esta agenda pero la tarea estaba muy por encima de sus capacidades y su comprensión de la situación. Mientras que los otros grupos de poder, igualmente conservadores, tampoco facilitaron que se avanzara en ella.

Después de la crisis seguramente habrá una idea más clara de las trabas que existen en la sociedad hondureña. Prácticamente todos los actores tendrán que reposicionarse, en ese sentido, dependerá mucho de la izquierda social, mucho más importante que la izquierda partidaria, el lograr constituirse en un actor independiente con su propia visión de la crisis y sus salidas.

Mientras tanto, la movilización social que comienza a cristalizar tras el golpe puede ser una oportunidad para relanzar la democratización de Honduras pero hay que reconocer que está dividida y si bien la conducción de la derecha es inocultable en el golpe, tiene una amplia base de apoyo.

Las lecturas de la crisis

A diferencia de otros golpes de estado ocurridos en el pasado, ahora la democracia es la única regla de legalidad y legitimidad para medir la solución de los conflictos del poder. Por esa razón, el golpe en Honduras desató un conjunto de reacciones que internacionalizó el problema y sus lecturas.

Aunque en la comunidad internacional hay una posición generalizada de rechazo al golpe, es posible identificar matices en los posicionamientos a partir de los intereses involucrados. Así, detrás de la defensa internacional de la legalidad democrática, aparecen peligrosas instrumentalizaciones que convierten la crisis hondureña en la cabecera de playa donde diferentes fuerzas envían señales al mejor estilo de la guerra fría donde se enfrentaban las fuerzas en

terceros escenarios. Para Latinoamérica éste es un test peligroso.

Para las lecturas de derecha, la mezcla de discrecionalidad del presidente Zelaya y el olor izquierdista derivado de su cercanía con Chávez y el Alba condujo a una medida profiláctica. Reconocen que fue un error y una transgresión de la ley, pero sostienen que era el mal menor frente a un enfrentamiento mayor en el futuro. De todos modos afirman, se retomará el cauce institucional luego de esta situación transitoria.

Tres mensajes son enviados entonces desde esta posición: a) gobiernos institucionales, sí; discrecionales, no; b) gobiernos electos, sí, izquierdistas con patrocinio extranjero, no; y c) es preferible el mal menor. Estos mensajes invalidan la posibilidad de que la sociedad escoja democráticamente, que en ella puedan convivir expresiones diferentes y se desconoce que el proceso político es conflicto, con negociaciones, tiempos y sanciones políticas propias de la democracia, por muy imperfecta que sea.

Esta lectura extremadamente conservadora fue lo que provocó la reacción unánime y dura en todos los países que, tanto en aquellos que han compartido la experiencia de las dictaduras como en los que intentan canalizar transformaciones y temen que la experiencia hondureña sirva de fuente de inspiración a fuerzas conservadoras.

Mientras tanto, las lecturas de izquierda se dividen en dos vertientes. Una vertiente, que podría calificarse como "institucionalista", pues defiende la democracia, promueve el respeto del marco institucional, el pluralismo y las transformaciones a través de procesos de desarrollo institucional, social y de los derechos. Para éstos, la crisis hondureña es una muestra de lo que ocurre cuando los actores del sistema político no buscan los recursos necesarios

para resolver sus conflictos y éste se bloquea.

La segunda vertiente se acerca a las visiones discrecionales y autoritarias de la política. En ella, la legalidad que otorgan las elecciones se debe convertir, a la vez, en control político del gobierno y el estado, bajo la discrecionalidad de un liderazgo único. De allí que la experiencia hondureña sea leída como una derrota en su método de manejo institucional.

La crisis de Honduras revive viejos fantasmas latinoamericanos sobre la canalización de los conflictos, luego de un período en el que las elecciones y la creencia en la democracia se habían extendido. Pero también hace evidente que estos lastres del pasado tienen que dejarse definitivamente atrás y que ese no es el camino para resolver los problemas de gobernabilidad de los países.

La internacionalización de la lucha por la democracia

Los procesos políticos nacionales siempre han estado atravesados por influencias internacionales y los intereses geopolíticos; sin embargo, el principio de soberanía y autodeterminación es la base fundamental de las relaciones entre los estados, aún cuando las convenciones e instancias internacionales han acotado fuertemente estos principios durante los últimos años. Frente a situaciones críticas, la comunidad internacional puede presionar, tomar sanciones y facilitar negociaciones, pero no puede intervenir directamente.

La crisis hondureña ha mostrado el peligro de que algunos gobiernos utilicen estas situaciones como validación internacional de un supuesto liderazgo o para exportar modelos políticos. El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha querido hacer de éste, un caso test para el Alba y su fortaleza política internacional. Sus irrespon-

sables amenazas de intervención directa solamente validarían un peligroso principio autoritario en el caso que llegaran a realizarse. Por eso, los países miembros del Alba deberían actuar con mucho cuidado en este campo, particularmente Nicaragua que tiene la mayor cercanía geográfica con Honduras y que se ha involucrado más de lo debido en ese conflicto.

En ese sentido, el rol que pueden, y deben jugar, instancias como la OEA, el Grupo de Río y el mismo SICA, pueden contribuir a buscar una mejor salida a esta situación y distensionar el ya encendido contexto latinoamericano.

Las lecciones a aprender

Indudablemente hay muchas lecciones a aprender de la experiencia hondureña. Nicaragua es uno de los países que más lecciones tiene que extraer de su vecino, aún cuando el tiempo todavía es corto para algunas de ellas. Es necesario reconocer que esta crisis es el resultado anunciado de una tormenta que se venía formando en el tiempo, por eso el gobierno debería obligarse a ver la situación del país y tratar de enmendar la crisis institucional que acarrea desde hace varios años. Además del caso hondureño, otros ejemplos pueden verse en los demás países latinoamericanos, pues no es la primera vez que un presidente ha caído por actos de corrupción o por crisis institucionales, basta ver los ejemplos de Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia.

Hay antecedentes en las conflictivas reformas constitucionales realizadas en Venezuela, Ecuador y Bolivia, y los resultados electorales poco transparentes en México. Esos también representan una alerta para los que pretenden realizar reformas constitucionales en Nicaragua, pues este recurso en

ningún caso ha abonado a mejorar los procesos políticos y mucho menos, el estado de la democracia. Pero para eso, Nicaragua no necesita ejemplos de afuera, bastan los de casa con las reiteradas reformas constitucionales de la década de los 90 y las más recientes.

La tendencia al continuismo político y la reelección en Colombia y Venezuela, solamente han introducido tensiones adicionales a los sistemas políticos anquilosados que enfrentan crecientes exigencias de cambio de sus sociedades. Esta es otra advertencia que el



país debe tomar en cuenta considerando las intenciones reeleccionistas del presidente Ortega y el cierre del sistema político.

La ola democrática que se fundó en procesos electorales bastante transparentes, ponía el acento sobre la legalidad democrática de los presidentes y demás poderes estatales. Los presidentes defenestrados en Ecuador, Bolivia y Argentina entre 1998 y 2002 marcaron un quiebre en el ejercicio electoral como mecanismo absoluto de la democracia que debe vincular legalidad y legitimidad de la máxima representación política. No importó el número de votos con que fueron electos, perdieron crédito político y apoyo social, fueron rechazados y tuvieron que irse. Ello muestra que la legalidad y la

construcción de legitimidad son dos esferas relacionadas pero no reducibles a la dimensión electoral. En Nicaragua, tanto el ejercicio del voto como el sistema electoral han perdido credibilidad y la distancia entre el legalismo y la verdadera legitimidad política de los gobernantes es cada vez más grande.

Los procesos políticos están mostrando que la norma democrática es indispensable no solamente para las instituciones sino para toda la sociedad, procurando la ampliación de derechos y las transformaciones sociales. Pero precisamente por eso, deben prevenirse las amenazas que representan los poderes facticos y las que se originan en el retorcimiento de los principios democráticos que esconden los autoritarismos legales. Esta es otra lección en el caso de Nicaragua frente a los intentos del gobierno de controlar a la sociedad mediante la restricción de libertades y derechos, y la intimidación con los CPC.

La Carta Democrática de la OEA, firmada por los países latinoamericanos establece que los pueblos y sus gobiernos tienen la obligación de promover y defender la democracia. Sin duda que cada país dará diferentes respuestas a esta exigencia según sus propias condiciones, pero los estándares son iguales para todos y una buena medida de prevención antes de llegar a situaciones críticas como la de Honduras.

30 años después que en Nicaragua triunfó una revolución que buscaba como democratizar al país, la crisis de Honduras alerta nuevamente sobre la necesidad urgente de instaurar formas de gobierno democráticas más allá de los legalismos y la formalidad. El reto del país sigue siendo el mismo de entonces.